

lar, acordando igualmente la cancelación de las inscripciones registrales practicadas en el Registro de la Propiedad;

Resultando que, presentado mandamiento en cumplimiento de la citada sentencia, fue calificado con nota del tenor literal siguiente: «Recibido el precedente mandamiento por correos el día 1 de febrero de 1982 y presentado a las diez horas del mismo día, fue retirado para la extensión por la Oficina liquidadora de la correspondiente nota; y retornado a este Registro son denegadas las cancelaciones ordenadas en el presente mandamiento por existir inscripciones posteriores respecto a las fincas reseñadas a los números 1 y 2 y al ser ganancial la número 3 no consta haber sido condenada la mujer, necesitándose el consentimiento de los titulares o resolución judicial, sustanciándose por los trámites del juicio declarativo correspondiente, como exige el artículo 40 de la Ley Hipotecaria.

Estimándose insubsanable este defecto no se toma anotación preventiva.

Plasencia, a 27 de febrero de 1982.—El Registrador.»

Resultando que el Procurador de los Tribunales don Joaquín Fernández Sánchez, en representación de «Banco Latino, Sociedad Anónima», interpuso recurso gubernativo contra la anterior calificación y alegó: que el artículo 82 de la Ley Hipotecaria establece que las inscripciones hechas en virtud de escritura no se cancelarán sino por sentencia contra la cual no esté pendiente recurso de casación, y en términos semejantes se produce el artículo 174 del Reglamento; que aunque la sentencia dictada en el procedimiento penal se hubiera limitado a considerar nula la donación sólo en cuanto al marido, es evidente que dicha nulidad afectaría igualmente a la efectuada por la mujer, por cuanto ésta no puede donar los bienes gananciales sin el consentimiento válido del marido; que don José Manchado tenía el usufructo de los bienes donados a sus hijos menores en virtud del antiguo artículo 160 del Código Civil, por lo que el consentimiento que haya podido prestar como tal usufructuario no es válido, y por tanto la escritura de extinción del condominio es nula;

Resultando que el Registrador de la Propiedad alegó en defensa de la nota que en virtud de sentencia ha sido condenada una parte de las dos que intervienen en todo contrato traslativo, sin haber sido oída ni notificada en el procedimiento, y precisamente se trata de los titulares registrales actuales; que las fincas cuyas inscripciones se ordena cancelar están inscritas a nombre de personas distintas del demandado y condenado don José Manchado Gómez, por lo que se produce una inexactitud que hay que rectificar, y el artículo 40 de la Ley Hipotecaria determina que en los casos en que haya de solicitarse judicialmente la rectificación, se dirigirá la demanda contra todos aquellos a quienes el asiento que se trata de rectificar conceda algún derecho; que las inscripciones cuya cancelación se solicita en el mandamiento ya no están vigentes, pues se ha practicado una inscripción posterior a favor de personas distintas; que el principio de consentimiento para las cancelaciones ha sido rigurosamente exigido por todas nuestras disposiciones legales y por diversas resoluciones de esta Dirección General; que la mujer del condenado tampoco ha sido condenada ni demandada en el procedimiento, y en la escritura de donación comparecieron ambos cónyuges, con lo que al cancelar la inscripción originada por esa escritura se produce un caso de indefensión;

Resultando que el Presidente de la Audiencia Territorial de Cáceres dictó auto, ordenando:

Primero.—Que se practicaran las cancelaciones ordenadas en el mandamiento judicial respecto a las fincas que tenían carácter de privativas del padre.

Segundo.—Que mantenía la denegación de la cancelación opuesta por el Registrador en la nota respecto a la vivienda que tenía carácter ganancial de los padres.

Resultando que el Registrador se alzó ante esta Dirección de la decisión presidencial, no habiéndolo hecho el recurrente,

Vistos los artículos 1.º, 38. 2.º y 40 d) de la Ley Hipotecaria y las Resoluciones de este Centro de 8 de marzo de 1950 y 11 de agosto de 1960;

Considerando que al haber recurrido del auto presidencial solamente el Registrador de la Propiedad, la única cuestión a debatir en este recurso, es la de si donadas por el padre a dos de sus hijos la mitad indivisa de un local comercial y de una vivienda, cabe cancelar esta inscripción hecha a favor de los donatarios, en virtud de un mandamiento expedido en diligencias preparatorias seguidas por delito de alzamiento de bienes consecuencia de la condena en sentencia firme impuesta al donante, sentencia que además declaró la nulidad de la escritura de donación realizada, todo ello cuando con anterioridad a la fecha no sólo del mandamiento sino de la propia sentencia, se había practicado una nueva inscripción de extinción del condominio existente en ambos inmuebles que aparecen ahora inscritos uno a favor de ambos donatarios y el otro a favor del restante condómino, sin que además ninguno de los tres titulares registrales haya intervenido o sido parte en el procedimiento;

Considerando que a la vista de lo expuesto, y siempre dentro del cauce del recurso gubernativo que ha de limitarse simplemente a declarar si puede o no practicarse el asiento solicitado, es forzoso manifestarse por la negativa, ya que por exigencias del principio registral de legitimación tan primordial en Derecho Hipotecario recogido fundamentalmente en los ar-

tículos 1 y 38 de la Ley es obligado el que para cancelar un asiento a nombre de persona determinada, no sólo se ejercite la acción contra la misma, sino que previamente o a la vez se estable demanda de nulidad o cancelación de la inscripción correspondiente;

Considerando que en aplicación de este principio general el artículo 40 d) de la Ley, previniendo el supuesto de nulidad del título que hubiere motivado el asiento en los libros del Registro, exige para su rectificación el consentimiento de sus titulares registrales, o en su defecto resolución judicial en la que la demanda se haya dirigido contra todos aquellos a quienes el asiento conceda algún derecho, lo que no resulta del presente supuesto, ya que del mandamiento calificado ninguno de los tres titulares actuales aparece tener intervención alguna en el procedimiento incoado.

Esta Dirección General ha acordado revocar parcialmente el auto apelado y confirmar la única parte de la nota de calificación objeto de recurso.

Lo que, con devolución del expediente original, comunico a V. E. para su conocimiento, el del recurrente y efectos.

Madrid, 23 de agosto de 1983.—El Director general, Francisco Mata Pallarés.

Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de Cáceres.

## MINISTERIO DE DEFENSA

**25550** REAL DECRETO 2519/1983, de 21 de septiembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Vicealmirante, Comandante en Jefe de la Armada de Uruguay, don Rodolfo Invidio Romaniello.

Queriendo dar prueba de Mi Real aprecio al Vicealmirante, Comandante en Jefe de la Armada de Uruguay, don Rodolfo Invidio Romaniello,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco.

Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,  
NARCISO SERRA SERRA

**25551** REAL DECRETO 2520/1983, de 21 de septiembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Contralmirante de la Armada de Argentina don Ciro Garcia.

Queriendo dar prueba de Mi Real aprecio al Contralmirante de la Armada de Argentina don Ciro Garcia,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco.

Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,  
NARCISO SERRA SERRA

**25552** ORDEN 111/02712/1983, de 21 de julio, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 3 de marzo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Florencio Sanz Pascual, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado permanente.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Florencio Sanz Pascual, Sargento de Infantería, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 2 de noviembre de 1979 y 15 de febrero de 1980, se ha dictado sentencia con fecha 3 de marzo de 1983, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Florencio Sanz Pascual representado por el Procurador don José Granados Weil, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 2 de noviembre de 1979 y 15 de febrero de 1980, debemos declarar y declaramos no ser las mismas en parte ajustadas a derecho, y, en consecuencia, las anulamos, asimismo, parcialmente, reconociendo, en cambio, a dicho recurrente el derecho que tiene a percibir el complemento de destino por responsabilidad en la función, desde la fecha de 1 de enero de 1972 hasta la entrada en vigor de la Ley 5/1976, de 11 de marzo, condenando a la Administración al pago de las cantidades que resulten; sin expresa imposición de costas.

Firme que sea la presente sentencia, remítase testimonio de la misma con el expediente administrativo al Ministerio de Defensa, para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.

Madrid, 21 de julio de 1983.—P. D., el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Michavila Pallarés.

Excmos. Sres. Subsecretario de Política de Defensa y General Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

**25555**

*ORDEN 111/02713/1983, de 21 de julio, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 10 de febrero de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Santos Leiras, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.*

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don José Santos Leiras, Sargento de Infantería, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 8 de mayo y 6 de julio de 1979, se ha dictado sentencia con fecha 10 de febrero de 1983, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Santos Leiras, representado por el Procurador don Baldomero Isorna Casal, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 8 de mayo y 6 de julio de 1979, debemos declarar y declaramos no ser las mismas en parte ajustadas a derecho, y, en consecuencia, las anulamos, asimismo, parcialmente, reconociendo, en cambio, a dicho recurrente el derecho que tiene a percibir el complemento de destino por responsabilidad en la función, desde la fecha de su efectividad económica en el empleo de Sargento, hasta la entrada en vigor de la Ley 5/1976 de 11 de marzo, condenando a la Administración al pago de las cantidades que resulten; sin expresa imposición de costas.

Firme que sea la presente sentencia, remítase testimonio de la misma con el expediente administrativo al Ministerio de Defensa, para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.

Madrid, 21 de julio de 1983.—P. D., el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Michavila Pallarés.

Excmos. Sres. Subsecretario de Política de Defensa y General Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

**25554**

*ORDEN 111/02714/1983, de 21 de julio, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 7 de marzo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Félix Hurtado Sánchez, Sargento de Infantería y Caballero Mutilado Permanente.*

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Félix Hurtado Sánchez, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 19 de enero y 14 de mayo de 1979, se ha dictado sentencia con fecha 7 de marzo de 1983 cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Félix Hurtado Sánchez, representado por el Letrado señor Sans Sans, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 19 de enero y 14 de mayo de 1979, debemos declarar y declaramos no ser las mismas en parte ajustadas a derecho, y, en consecuencia, las anulamos, asimismo, parcialmente, reconociendo, en cambio, a dicho recurrente el derecho que tiene a percibir el complemento de destino por responsabilidad en la función, desde la fecha de la efectividad económica de su ascenso a Sargento hasta la entrada en vigor de la Ley 5/1976, de 11 de marzo, condenando a la Admi-

nistración al pago de las cantidades que resulten; sin expresa imposición de costas.

Firme que sea la presente sentencia, remítase testimonio de la misma con el expediente administrativo al Ministerio de Defensa, para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.

Madrid, 21 de julio de 1983.—P. D., el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Michavila Pallarés.

Excmos. Sres. Subsecretario de Política de Defensa y General Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

**25555**

*ORDEN 111/02818/1983, de 28 de julio, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 7 de marzo de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Gumersindo González Barro, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.*

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Gumersindo González Barro, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra las resoluciones del Ministerio de Defensa de 28 de marzo y de 1 de junio de 1979, se ha dictado sentencia con fecha 7 de marzo de 1983, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Gumersindo González Barro, representado por el Procurador señor Isorna Casal, contra las resoluciones del Ministerio de Defensa de 28 de marzo y de 1 de junio de 1979, debemos declarar y declaramos no ser las mismas en parte ajustadas a derecho y, en consecuencia, las anulamos, asimismo, parcialmente, reconociendo, en cambio, a dicho recurrente el derecho que tiene a percibir el complemento de destino por responsabilidad en la función desde la fecha de su efectividad económica de su ascenso a Sargento hasta la entrada en vigor de la Ley 5/1976, de 11 de marzo, condenando a la Administración al pago de las cantidades que resulten; sin expresa imposición de costas.

Firme que sea la presente sentencia, remítase testimonio de la misma con el expediente administrativo al Ministerio de Defensa, para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.

Madrid, 28 de julio de 1983.—P. D., el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Michavila Pallarés.

Excmos. Sres. Subsecretario de Política de Defensa y General Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

**25556**

*ORDEN 111/02846/1983, de 28 de julio, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 3 de febrero de 1983, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Luis Zazo Sánchez, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.*

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Luis Zazo Sánchez, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra las resoluciones del Ministerio de Defensa de 30 de marzo y de 21 de junio de 1979, se ha dictado sentencia con fecha 3 de febrero de 1983, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Granados Weil, Procurador, en nombre y representación de don Luis Zazo Sánchez, contra las resoluciones del Ministerio de Defensa de 30 de marzo y 21 de junio de 1979, debemos declarar y declaramos no ser las mismas en parte ajustadas a derecho, y, en conse-